

Señor
JUEZ TREINTA Y DOS (32) CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.
E mail: j32cctobta@cendoj.ramajudicial.gov.co
E. S. D.

REFERENCIA.	RESPONSABILIDAD	CIVIL
	EXTRACONTRACTUAL	
RADICACIÓN.	11001 3103 032 2023 00348 00	
DEMANDANTE.	ANGIE NATALIA GAMBA RINCÓN Y ROSA MARÍA RINCÓN MILLÁN	
DEMANDADOS.	LILIANA MARÍA ROJAS AMOROCHO, JOSÉ PABLO MEJÍA PLATA Y ALLIANZ SEGUROS S.A.	
ASUNTO.	<u>CONTESTACIÓN A LA DEMANDA</u>	

JAIME ENRIQUE HERNÁNDEZ PÉREZ, mayor de edad, con domicilio y residencia en Bogotá D.C., identificado con cédula de ciudadanía número 79.938.138 expedida en Bogotá D.C., acreditado con la tarjeta profesional de abogado número 180.264 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando como apoderado judicial de la Compañía **ALLIANZ SEGUROS S.A.** sociedad identificada con **NIT. 860.026.182-5**, sociedad comercial vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, representada legalmente por la doctora **MARÍA CONSTANZA ORTEGA REY**, mayor de edad, con domicilio y residencia en Bogotá D.C., identificada con cédula de ciudadanía número 52.021.575 expedida en Bogotá, dentro del proceso de la referencia, procederé a contestar la demanda formulada por la señora **ANGIE NATALIA GAMBA RINCÓN** y otra, para que procesalmente se disponga lo pertinente.

OPORTUNIDAD

Mediante estado electrónico No. 154 del 17 de octubre de 2023, el Despacho dispuso:

“En atención a lo indicado por el extremo activante frente al requerimiento efectuado en auto de 2 de octubre de 2023 [11RespuestaAuto2Octubre]; reconócese al abogado Jaime Enrique Hernández Pérez como apoderado de Allianz Seguros S.A.

Téngase como notificado por conducta concluyente a Allianz Seguros S.A., del auto admisorio de la demanda a partir de la notificación de este proveído (inc. 2° art. 301 del C.G.P.)”

Así las cosas, tenemos que mi representada fue notificada mediante estado electrónico No. 154 del 17 de octubre de 2023, por lo que, a partir del 18 de octubre de 2023, comenzó a correr el término de traslado de la contestación de la demanda, el cual finaliza el 16 de noviembre de 2023; en consecuencia, esta contestación se presenta en término.

I. RESPUESTA A LO RELACIONADO EN EL ACÁPITE DENOMINADO “I. HECHOS” DE LA DEMANDA

Respecto a los hechos planteados por la parte demandante manifiesto lo siguiente:

“De la actividad peligrosa y la causalidad”

AL HECHO “1.”. No le consta a mi representada las circunstancias de tiempo y lugar en las que ocurrió el accidente de tránsito del 11 de febrero de 2021, toda vez que son hechos ajenos a mi mandate, por esta razón, me atengo a lo que se pruebe en el proceso.

AL HECHO “2.”. No le consta a mi representada el lugar por donde transitaba el vehículo con placas HTW-882, toda vez que son hechos ajenos a mi mandate, por esta razón, me atengo a lo que se pruebe en el proceso.

AL HECHO “3.”. No le consta a mi representada el lugar por donde transitaba la motocicleta con placas MCA57F, toda vez que son hechos ajenos a mi mandate, por esta razón, me atengo a lo que se pruebe en el proceso.

AL HECHO “4.”. Es cierto.

AL HECHO “5.”. No le consta y no es un hecho, toda vez que contiene una apreciación subjetiva del apoderado de la parte actora, teniendo en cuenta que, no existen pruebas conducentes y pertinentes que demuestren que el vehículo con placas HTW-882, pasó el semáforo cuando se encontraba en rojo.

En el caso particular, es evidente la colisión de actividades peligrosas, por lo que la parte demandante debe probar la existencia de todos los elementos de la responsabilidad, incluida la culpa exclusiva de quien se demanda, lo que no se evidencia en el presente caso.

En efecto, en el informe de tránsito se señaló la hipótesis 157 *“Por establecer quien cruza semáforo en rojo”*. No obstante, por falta de elementos de juicio, no se le atribuyó a ninguno de los involucrados.

Entonces, resulta claro que, con la evidencia disponible, no es posible asignar válidamente ningún grado de responsabilidad a ninguno de los vehículos intervinientes en el accidente de tránsito. Esto, visto a la luz del régimen de culpa probada producto de la colisión de actividades peligrosas, hace que no sea posible atribuir responsabilidad alguna a ninguno de los demandados.

“Del daño”

AL HECHO “6.”. No le consta a mi representada los daños causados a la motocicleta con placas MCA-57F, toda vez que es un hecho ajeno a mi mandate, por esta razón, me atengo a lo que se pruebe en el proceso.

AL HECHO “7.”. No es un hecho y no le consta a mi representada las lesiones sufridas por la señora Angie Natalia Gamba Rincón a causa del accidente de tránsito, ni los procedimientos quirúrgicos realizados, toda vez que, es un hecho ajeno a mi mandante, por esta razón, me atengo al contenido literal de la historia clínica y a lo que se pruebe en el proceso.

AL HECHO “8.”. No es un hecho y no le consta a mi representada lo relatado en este numeral, toda vez que, es un hecho ajeno a mi mandante, por esta razón, me atengo al contenido literal de la historia clínica y a lo que se pruebe en el proceso.

AL HECHO “9.”. No es un hecho y no le consta a mi representada las lesiones y secuelas padecidas por la señora Angie Natalia Gamba Rincón con ocasión al accidente de tránsito, toda vez que es un hecho ajeno a mi mandante, por esta razón, me atengo al contenido literal del informe pericial de clínica forense y a lo que se pruebe en el proceso.

AL HECHO “10.”. Es cierto que, Seguros de Vida Alfa S.A. emitió dictamen de pérdida de capacidad laboral conforme a la documental aportada con la demanda.

No le consta a mi representada que dicha decisión haya sido recurrida, toda vez que es un hecho ajeno a mi mandante, aunado a que no existe prueba dentro del expediente que respalde dicha afirmación, por esta razón, me atengo a lo que se pruebe en el proceso.

AL HECHO “11.”. No es un hecho, corresponde a apreciaciones subjetivas del apoderado de la parte demandante, por esta razón, me atengo a lo que se pruebe en el proceso.

Sin embargo, es preciso señalar que, de acuerdo con el dictamen de pérdida de capacidad laboral emitido por Seguros de Vida Alfa S.A., no se evidencia que se haya otorgado un porcentaje por deficiencia en cuanto a la movilidad, autocuidado – cuidado personal y vida doméstica.

De igual manera, en el dictamen se indicó *“Restricción del rol: se le da valor 5%. Usuario que se desempeña como analista quien por sus patologías requiere de restricciones leves para la ejecución de su tarea”*. Por lo anterior, las afirmaciones del apoderado de la parte actora en cuanto a que *“en el ámbito laboral se encuentra en condición de desventaja, pues la limitación funcional le genera una mayor dificultad para optar con libertad por otro tipo de empleos que fueren más rentables y que requieran el 100% de la capacidad laboral, lo que la deja en una condición material de inferioridad y de competencias*

disminuidas.”, carecen de total fundamento, teniendo en cuenta que la demandante no es una persona inválida, por esta razón, me atengo a lo que se pruebe en el proceso.

AL HECHO “12.”. No es un hecho, corresponde a apreciaciones subjetivas del apoderado de la parte demandante, por esta razón, me atengo a lo que se pruebe en el proceso.

AL HECHO “13.”. No es un hecho, corresponde a apreciaciones subjetivas del apoderado de la parte demandante, por esta razón, me atengo a lo que se pruebe en el proceso.

Ahora, el apoderado señala “(...) *la dependencia a una silla de ruedas para movilizarse, al uso de muletas, bastón le genero gran frustración y dolor; así también, la dependencia para hacer sus necesidades biológicas y ver que su proyecto de vida fue alterado (...)*”; sin embargo, de acuerdo con el dictamen de pérdida de capacidad laboral emitido por Seguros de Vida Alfa S.A. se indicó que no contaba con ninguna limitación.

CLASIFICACIÓN CONDICION SALUD - TIPO DE ENFERMEDAD (Marque con una X)					
REQUIERE DE TERCERAS PERSONAS PARA realizar sus actividades de la vida diaria (áreas ocupacionales)		SI		NO	X
SE REQUIERE CURADOR PARA LA TOMA DE DECISIONES		SI		NO	X
REQUIERE DE DISPOSITIVOS DE APOYO para realizar actividades de la vida diaria (áreas ocupacionales)		SI		NO	X
REVISION PENSION: NO	TIPO DE ENFERMEDAD / DEFICIENCIA: SIN DATO	DEGENERATIVA	N/A	PROGRESIVA	N/A

AL HECHO “14.”. No es un hecho, corresponde a apreciaciones subjetivas del apoderado de la parte demandante, por esta razón, me atengo a lo que se pruebe en el proceso.

“De las características de las víctimas.”

AL HECHO “15.”. Este hecho está presentado de manera antitécnica, toda vez que, no cumple con los requisitos del artículo 82 del Código General del Proceso, por esta razón, me permito manifestarme separadamente respecto de cada una de las afirmaciones realizadas por el apoderado de la parte demandante:

No le consta a mi representada que, la señora Angie Natalia Gamba Rincón fuera estudiante de séptimo semestre de lenguas modernas, toda vez que es un hecho ajeno a mi mandante, aunado a que no existe prueba que respalde dicha afirmación, por esta razón, me atengo a lo que se pruebe en el proceso.

No le consta a mi representada la actividad económica que ejercía la demandante, ni el salario que devengaba, toda vez que es un hecho ajeno a mi mandate, por esta razón, me atengo a lo que se pruebe en el proceso.

No le consta a mi representada, el estado civil de la demandante, ni con quien vivía para la fecha del accidente de tránsito, toda vez que es un hecho ajeno a mi mandate, por esta razón, me atengo a lo que se pruebe en el proceso.

AL HECHO “16.”. No le consta a mi mandante, teniendo en cuenta que corresponde a una situación personal de la señora Rosa María Rincón Millán, por esta razón, me atengo a lo que se pruebe en el proceso.

“De la guarda de la actividad peligrosa, la póliza de seguros y otros hechos relevantes”

AL HECHO “17.”. Es parcialmente cierto. Explico: Es cierto que, para el 11 de febrero de 2021, el vehículo con placas HTW-882 se encontraba asegurado con Allianz Seguros S.A. mediante póliza de automóviles; sin embargo, el mencionado contrato de seguro, ampara entre otros riesgos, la responsabilidad civil extracontractual.

AL HECHO “18.”. Es cierto; sin embargo, me atengo al tenor literal de la póliza de automóviles.

AL HECHO “19.”. Es cierto, sin embargo, me atengo al tenor literal de la póliza de automóviles.

AL HECHO “20.”. Es parcialmente cierto. Explico: Es cierto que la póliza de seguros de automóviles No. 22403031, en su Capítulo I – Coberturas de daños a terceros establece lo siguiente:

“1.1 Responsabilidad Civil Extracontractual
1.1.1 ¿Qué cubre?
Los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales causados a terceras personas cuando:
a. Usted (o alguien autorizado por Usted) conduzca el vehículo asegurado.”

Sin embargo, de acuerdo con lo anterior, el tercero debe acreditar los perjuicios de carácter patrimonial y extrapatrimonial que reclama y, en este mismo sentido, demostrar que los mismos son consecuencia de un evento en el que la demandada es responsable.

AL HECHO “21.” Este hecho está presentado de manera antitécnica, toda vez que, no cumple con los requisitos del artículo 82 del Código General del Proceso, por esta razón, me permito manifestarme separadamente respecto de cada una de las afirmaciones realizadas por el apoderado de la parte demandante:

No consta a mi representada que, el vehículo con placas HTW-882 haya sido entregado de manera provisional a su propietario dentro del proceso penal con radicado 110016000023-2021-80035, toda vez que son hechos ajenos a mi mandate, por esta razón, me atengo a lo que se pruebe en el proceso.

Es parcialmente cierto. Explico: El 30 de marzo de 2021, el señor José Pablo Mejía Plata realizó el traspaso del vehículo a Allianz Seguros S.A.; sin embargo, mi representada en la actualidad no es la propietaria del automotor, considerando que, el 8 de julio de 2021 transfirió el dominio a Ortiz & Rojas Inversiones S.A.S., tal y como se desprende del certificado de tradición y libertad:

PLACA: HTW882

Página 2 de 2

CERTIFICADO DE LIBERTAD Y TRADICIÓN

Nro. CT902359390

10/08/2018 De PFIZER S.A.S , A ANGELA PATRICIA SOUSA STERLING, Traspaso; 22/03/2019 De ANGELA PATRICIA SOUSA STERLING, A JOSE PABLO MEJIA PLATA, Traspaso; 30/03/2021 De JOSE PABLO MEJIA PLATA, A ALLIANZ SEGUROS SA , Traspaso a una compañía de seguros por pérdida parcial o destrucción parcial; 08/07/2021 De ALLIANZ SEGUROS SA , A ORTIZ & ROJAS INVERSIONES SAS , Traspaso; 03/02/2022 De ORTIZ & ROJAS INVERSIONES SAS , A FERNANDO BERNAL HOLGUIN, Traspaso

AL HECHO “22.” Es cierto que, el 07 de marzo de 2023 se llevó a cabo audiencia de conciliación ante el centro de conciliación de la Procuraduría General de la Nación.

II. RESPECTO AL ACÁPITE DENOMINADO “II. PRETENSIONES” DE LA DEMANDA

Debo indicar de manera respetuosa que me opongo a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, con fundamento en los argumentos expuestos en el presente documento.

“DECLARATIVAS.”

A LA “PRIMERA:.” Me opongo a la declaración solicitada considerando que, en el caso en particular no se observan pruebas conducentes, pertinentes y útiles de la responsabilidad de los demandados, así como tampoco, de la existencia de alguna obligación indemnizatoria.

Lo anterior, teniendo en cuenta que ambos vehículos ejercían una actividad peligrosa, por lo que la parte demandante, tenía la carga de probar la existencia de todos los elementos de la responsabilidad, incluida la culpa exclusiva de quien se demanda, lo que no se evidencia en el presente caso.

Es preciso señalar que, en el Informe Policial de Accidentes de tránsito – IPAT, no se codificó a ningún vehículo, solo se indicó la hipótesis “157 – por establecer quien cruza semáforo en rojo”, por lo tanto, no es atribuible responsabilidad alguna a los demandados.

11. HIPÓTESIS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO			
DEL CONDUCTOR	457	DEL VEHÍCULO	
		DE LA VÍA	
OTRA	157	DEL PEATÓN	
		DEL PASAJERO	
ESPECIFICACIÓN: por establecer quien cruza semáforo en rojo.			
12. TESTIGOS			

A LA “SEGUNDA.”. Me opongo a la condena solicitada considerando que, en el caso particular, no se observan pruebas conducentes, pertinentes y útiles de la responsabilidad de mi representada. Ahora, de acuerdo con la póliza de Seguros de Automóviles No. 22403031, en su Capítulo I – Coberturas de daños a terceros se estableció que el tercero debía acreditar los perjuicios de carácter patrimonial y extrapatrimonial que reclama y, en este mismo sentido, demostrar que los mismos son consecuencia de un evento en el que el asegurado (demandado) es responsable.

“CONDENATORIAS”

“DAÑOS PATRIMONIALES”

“Lucro Cesante Consolidado”

A LA “PRIMERA.”. Me opongo a la condena solicitada, considerando que, en el caso en particular, no se observan pruebas conducentes, pertinentes y útiles de la responsabilidad de mi representada ni de los demás demandados, así como tampoco, de la existencia de alguna obligación indemnizatoria.

En el caso particular, la parte demandante pretende el pago de diecisiete millones cuatrocientos ochenta y dos mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos (\$17.482.469) a título de **Lucro Cesante Consolidado**; sin embargo, la certificación de ingresos emitida por la señora Yuliet Natalia González, directora de talento humano de Seguros Premium LTDA. deberá ser objeto de ratificación, con exhibición de los soportes que llevaron a su emisión.

Ahora, el apoderado de la parte demandante realizó la liquidación con base en el salario básico más comisiones; sin embargo, para que las comisiones constituyan salario, estas deberán ser probadas, en el sentido de que se concedían de manera habitual, aunado a que, la liquidación se realizó sobre una pérdida de capacidad laboral del 35% la cual no se encuentra probada; por el contrario, reposa dentro del expediente dictamen de pérdida de la capacidad laboral emitido por Seguros Alfa S.A., en el cual se le otorgó a la demandante una PCL del 13,50%, lo cual dista de lo manifestado por el apoderado de la parte actora.

Adicionalmente, es de resaltar que este tipo de perjuicios solo se deben indemnizar en la medida en que se compruebe su certeza y que efectivamente se hayan ocasionado, cuestión que incumbe a quien los reclama.

Así mismo, no se encuentra demostrado que la señora Angie Natalia Gamba Rincón, se hubiera visto forzada a abandonar sus actividades cotidianas y, producto de ello, hubiera dejado de obtener sus respectivas erogaciones o ganancias, motivo por el cual queda desvirtuada la existencia del derecho.

Tenemos que, para liquidar el lucro cesante consolidado se debe tener en cuenta el número de meses transcurridos desde el momento del accidente de tránsito hasta la fecha de la liquidación.

“Lucro Cesante Futuro”

A LA “SEGUNDA.”. Me opongo a la condena solicitada, considerando que, en el caso en particular, no se observan pruebas conducentes, pertinentes y útiles de la responsabilidad de mi representada ni de los demás demandados, así como tampoco, de la existencia de alguna obligación indemnizatoria.

En el caso particular, la parte demandante pretende la suma de ciento veintiséis millones doscientos dieciséis mil seiscientos cuarenta y dos pesos (\$126.216.642) a título de **Lucro Cesante Futuro**; sin embargo, la certificación de ingresos emitida por la señora Yuliet Natalia González, directora de talento humano de Seguros Premium LTDA, deberá ser objeto de ratificación, con exhibición de los soportes que llevaron a su emisión.

Ahora, el apoderado de la parte demandante realizó la liquidación con base en el salario básico más comisiones; sin embargo, para que las comisiones constituyan salario, estas deberán ser probadas, en el sentido de que se concedían de manera habitual, aunado a que, la liquidación se realizó sobre una pérdida de capacidad laboral del 35% la cual no se encuentra probada; por el contrario, reposa dentro del expediente dictamen de pérdida de la capacidad laboral emitido por Seguros Alfa S.A., en el cual se le

otorgó a la demandante una PCL del 13,50%, lo cual dista de lo manifestado por el apoderado de la parte actora.

Adicionalmente, es de resaltar que este tipo de perjuicios solo se deben indemnizar en la medida en que se compruebe su certeza y que efectivamente se hayan ocasionado, cuestión que incumbe a quien los reclama.

Finalmente, se tiene que el apoderado de la parte demandante realizó la cuantificación del lucro cesante futuro sin aplicar las fórmulas jurisprudencialmente conocidas para el efecto, sin aportar siquiera un ejercicio matemático para liquidar el daño; sin embargo, este análisis no fue realizado por la parte demandante y su pretensión carece de fundamento.

Tenemos que, para liquidar el lucro cesante futuro, se debe tener en cuenta el número de meses transcurridos desde la fecha de la liquidación hasta la edad probable de acuerdo con la esperanza de vida emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia; sin embargo, este análisis no fue realizado por la parte demandante y su pretensión carece de fundamento.

A LA “TERCERA. DE CARÁCTER SUBSIDIARIO A LAS PRETENSIONES CONDENATORIAS PRIMERA Y SEGUNDA”. Me opongo a la condena solicitada considerando que, al no existir obligación de pago, tampoco existe el derecho a que se reconozcan sumas adicionales a las solicitadas en la demanda.

“DAÑOS EXTRAPATRIMONIALES”

“Daño A La Vida De Relación.”

A LA “CUARTA.”. Me opongo a la condena solicitada considerando que, en el caso en particular, no se observan pruebas conducentes, pertinentes y útiles de la responsabilidad de mi representada ni de los demás demandados, así como tampoco de la existencia de alguna obligación indemnizatoria.

Respecto al concepto de **Daño a la Vida de Relación** se resalta que, la cifra solicitada por la señora Angie Natalia Gamba resulta ser excesiva en consideración a lo ya decantado jurisprudencialmente, aunado a que, el reconocimiento de este daño se encuentra supeditado, a la prueba real y efectiva de la intensidad de los sufrimientos en la esfera externa de la demandante, sin que sea procedente la construcción de presunción alguna en este sentido.

“Daño Moral”

A LA “QUINTA.”. Me opongo a la condena solicitada considerando que, en el caso en particular, no se observan pruebas conducentes, pertinentes y útiles de la responsabilidad de mi representada ni de los demás demandados, así como tampoco de la existencia de alguna obligación indemnizatoria.

Respecto del **Daño Moral**, la señora Angie Natalia Gamba pretende el pago de sesenta millones de pesos (\$60.000.000), cifra que resulta ser excesiva, teniendo en cuenta que la Corte Suprema de Justicia ha determinado un precedente de setenta y dos millones de pesos (\$72.000.000) para los casos dramáticos, aunado a que, el reconocimiento de este daño se encuentra supeditado, a la prueba real y efectiva de la intensidad de los sufrimientos en la esfera interna de la demandante, sin que sea procedente la construcción de presunción alguna en este sentido.

“Daño A La Vida De Relación.”

A LA “SEXTA.”. Me opongo a la condena solicitada considerando que, en el caso en particular, no se observan pruebas conducentes, pertinentes y útiles de la responsabilidad de mi representada ni de los demás demandados, así como tampoco de la existencia de alguna obligación indemnizatoria.

Respecto al **Daño a la Vida de Relación**, se resalta que los setenta millones de pesos (\$70.000.000) solicitados por la señora Rosa María Rincón resultan ser excesivos en consideración a lo ya decantado jurisprudencialmente, aunado a que, el reconocimiento de este daño se encuentra supeditado a la prueba real y efectiva de la intensidad de los sufrimientos en la esfera externa de la demandante, sin que sea procedente la construcción de presunción alguna en este sentido.

“Daño Moral”

A LA “SEPTIMA.”. Me opongo a la condena solicitada considerando que, en el caso en particular, no se observan pruebas conducentes, pertinentes y útiles de la responsabilidad de mi representada ni de los demás demandados, así como tampoco de la existencia de alguna obligación indemnizatoria.

Respecto del **Daño Moral**, se resalta que la señora Rosa María Rincón pretende el pago de treinta millones de pesos (\$30.000.000); sin embargo, dicha suma resulta ser excesiva, teniendo en cuenta que la Corte Suprema de Justicia ha determinado un precedente de setenta y dos millones de pesos (\$72.000.000) para los casos dramáticos, aunado a que, el reconocimiento de este daño se encuentra supeditado, a la prueba real y efectiva de la intensidad de los sufrimientos en la esfera interna de la demandante, sin que sea procedente la construcción de presunción alguna en este sentido.

A LA “OCTAVA. DE CARÁCTER SUBSIDIARIO A LA PRETENSION CUARTA, QUINTA, SEXTA Y SEPTIMA.”. Me opongo a la condena solicitada considerando que, en el caso en particular, no se observan pruebas conducentes, pertinentes y útiles de la responsabilidad de mi representada ni de los demás demandados, así como tampoco de la existencia de alguna obligación indemnizatoria.

“Intereses moratorios. (Artículo 1080 Código De Comercio)”

A LA “NOVENA.”. Me opongo a la condena solicitada por la parte demandante, considerando que, al no existir obligación alguna de pago, tampoco existe el derecho al pago de intereses moratorios.

Ahora en el eventual caso que mi representada sea condenada, en lo referente a los intereses moratorios solicitados, estos solo podrán reconocerse a partir de la ejecutoria de la sentencia que ordena el pago, pues se debe acreditar el siniestro y determinar su monto, acorde con la Sentencia SC-5217-2019.

Por lo anterior el pago de los intereses moratorios, solo se causan a partir de la ejecutoria de la sentencia, considerando que al momento de la reclamación no se conoce o no existe certeza de la cuantía, elemento esencial para la configuración de la mora.¹

“Otras”

A LA “DECIMA.”. Me opongo a la condena solicitada considerando que, la jurisdicción ordinaria no cuenta con facultades ultra y extra petita.

A LA “UNDECIMA.”. Me opongo a la condena solicitada por la parte demandante, teniendo en cuenta que, al no existir la obligación alguna de pago, tampoco existe el derecho al pago de costas y agencias en derecho.

III. PRONUNCIAMIENTO FRENTE AL ACÁPITE DENOMINADO “V. JURAMENTO ESTIMATORIO” DE LA DEMANDA

Respecto a las pretensiones relacionadas con los perjuicios patrimoniales manifiesto que no se observan pruebas conducentes, pertinentes y útiles que permitan inferir su existencia con certeza y que corresponden a perjuicios causados como consecuencia de la responsabilidad civil de la parte demandada.

Así las cosas, el daño es el elemento más importante en la responsabilidad civil, pues la reparación parte de la base de su existencia². De ahí que es muy importante conocer cuáles son los requisitos del daño si lo que se quiere es lograr su reparación. De modo que, los únicos requisitos del daño indemnizable son la certeza, la ilicitud y el carácter personal³.

La certeza del daño ocurre cuando no haya duda de su concreta realización. Además, es el requisito *“más importante (...), al punto que, sin su ocurrencia y demostración, no hay lugar a reparación alguna”*⁴.

¹ Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil Radicado N° 11001-22-03-000-2020-01122-01, quince (15) de octubre de dos mil veinte (2020).

² DIEGO FERNANDO GARCÍA VÁSQUEZ, “Manual de responsabilidad civil y del Estado”, Ed. Librería Ediciones del Profesional Ltda, 1ª ed., Bogotá, Colombia, 2009, pág. 13.

³ OBDULIO VELÁSQUEZ POSADA, “Responsabilidad civil extracontractual”, Ed. Temis, 2ª ed., Bogotá, Colombia, 2016, pág. 269.

⁴ CSJ, SC del 1º de noviembre de 2013, Rad. N.º 1994- 26630-01; CSJ, SC del 17 de noviembre de 2016, Rad. N.º2000-00196-01.

El artículo 206 del Código General del Proceso, dispuso dos objetivos al regular el juramento estimatorio: la formulación de pretensiones justas y economizar la actividad probatoria, desarrollándolo no solo como medio de prueba, sino también como requisito de la demanda.

Revisando las pretensiones de la parte demandante se observa que estas exceden en buena medida los límites establecidos por la jurisprudencia y, en tal sentido, deberán ser debidamente valoradas y ajustadas por el Despacho, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que resulten procedentes.

Frente a los conceptos reclamados por perjuicios materiales (Lucro Cesante Consolidado y Futuro):

Este tipo de perjuicios solo se deben indemnizar en la medida en que se compruebe su certeza y que efectivamente se hayan ocasionado, cuestión que incumbe a quien los reclama, pues, aunque incluso en los eventos en que se deja establecida la responsabilidad por un hecho injusto, “...*esta no conduce en todos los casos, ni de manera indefectible, a la condena de perjuicios...*”⁵, toda vez que *...para que haya lugar a indemnización se requiere que haya perjuicios, los que deben demostrarse porque la culpa por censurable que sea no los produce de suyo. Vale esto como decir que quien demanda que se le indemnice debe probar que los ha sufrido. Más todavía: bien puede haber culpa y haberse demostrado perjuicios y, sin embargo, no prosperar la acción indemnizatoria porque no se haya acreditado que esos sean efecto de aquella; en otros términos, es preciso establecer el vínculo de causalidad entre una y otros*”⁶.

En ese orden de ideas, cierto e indiscutible es que quien reclama la indemnización de perjuicios, debe acreditar plenamente su cuantía y en qué consistieron los mismos, por cuanto siempre ha de exigirse certeza del detrimento y no partir de meras hipótesis o eventualidades.

Sobre el particular, en materia probatoria, le corresponde a las partes demostrar todos aquellos hechos que sirvan de presupuesto a la norma que consagra el derecho que persiguen, de tal suerte que quien invoca un hecho para lograr la aplicación de determinada preceptiva legal, corre con la carga de su demostración fehaciente, pues de lo contrario la decisión será adversa a tal pedimento, lo que se complementa con el artículo 1757 del Código Civil, conforme al cual incumbe probar las obligaciones o su extinción a quien alega aquellas o esta, pues “...*Los derechos sub-lite dependen de la acción u omisión del interesado. Las cargas procesales imponen a la parte asumir ciertas conductas o abstenciones cuyo incumplimiento puede generar riesgos de una decisión desfavorable y, por ende, el no reconocimiento de sus derechos subjetivos (...)* los efectos de su incumplimiento acarrearán riesgos que pueden concretarse en una decisión adversa...”⁷

De conformidad con lo establecido en el artículo 167 del Código General del Proceso, “*incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen (...)*”; sin embargo, en el presente caso se observa que **la parte demandante no presenta pruebas pertinentes, conducentes y útiles que lleven al convencimiento de la existencia de las obligaciones indemnizatorias reclamadas y de la cuantía de los perjuicios solicitados**. En este sentido, observada la falta de prueba de los perjuicios materiales, solicitamos respetuosamente al Despacho declarar infundado el juramento estimatorio presentado.

Frente al lucro cesante se refiere al provecho que, de no producirse el daño, debió entrar al patrimonio de la víctima, pero el quebranto de ese interés que se deja de percibir obedece a una situación real, susceptible de constatación física, material u objetiva, y excluye la eventualidad de hipotéticas ganancias, cuya probabilidad es simplemente remota.

En el caso particular, la parte demandante pretende el pago de diecisiete millones cuatrocientos ochenta y dos mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos (\$17.482.469) a título de **Lucro Cesante Consolidado** y, la suma de ciento veintiséis millones doscientos dieciséis mil seiscientos cuarenta y dos pesos (\$126.216.642) por concepto de **Lucro Cesante Futuro**; sin embargo, la certificación emitida por la señora Yuliet Natalia González, directora de talento humano de Seguros Premium LTDA deberá ser objeto de ratificación, con exhibición de los soportes que llevaron a su emisión.

Ahora, el apoderado de la parte demandante realizó la liquidación con base en el salario básico más comisiones; sin embargo, para que las comisiones constituyan salario, estas deberán ser probadas, en el sentido de que se concedían de manera habitual, aunado a que, la liquidación se realizó sobre una pérdida

⁵ Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sala Civil. Providencia del 4 de mayo de 2011. Exp. 2007-334-01.

⁶ C.S.J. Sentencia calendaria el 24 de julio de 1985. G.J. CLXXX. Pág. 182.

⁷ Corte Suprema de Justicia, sentencia C-070 de 1993, citada en sentencia del 30 de septiembre de 2004, exp. 7142.

de capacidad laboral del 35% la cual no se encuentra probada; por el contrario, reposa dentro del expediente dictamen de pérdida de la capacidad laboral emitido por Seguros Alfa S.A., en el cual se le otorgó a la demandante una PCL del 13,50%, lo cual dista de lo manifestado por el apoderado de la parte actora.

Tenemos que, para liquidar el lucro cesante consolidado se debe tener en cuenta el número de meses transcurridos desde el momento del accidente de tránsito hasta la fecha de la liquidación y, para liquidar el lucro cesante futuro, el número de meses transcurridos desde la fecha de la liquidación hasta la edad probable de acuerdo con la esperanza de vida emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia; sin embargo, este análisis no fue realizado por la parte demandante y su pretensión carece de fundamento.

Adicionalmente, es de resaltar que este tipo de perjuicios solo se deben indemnizar en la medida en que se compruebe su certeza y que efectivamente se hayan ocasionado, cuestión que incumbe a quien los reclama.

Así mismo, no se encuentra demostrado que la señora Angie Natalia Gamba Rincón, se hubiera visto forzado a abandonar sus actividades cotidianas y, producto de ello, hubiera dejado de obtener sus respectivas erogaciones o ganancias, motivo por el cual queda desvirtuada la existencia del derecho.

Por lo anterior, manifiesto que las pretensiones relacionadas en la demanda carecen de sustento probatorio, por lo que no deben ir dirigidas a mi representada y no corresponden al principio general de indemnización consagrado en el artículo 1088 y 1089 del Código de Comercio, y a lo reiterado por la Jurisprudencia Nacional.

Ante la ausencia total de pruebas de lo reclamado, no puede darse a tal concepto el valor probatorio propio del juramento estimatorio.

Por las razones expuestas, de manera respetuosa ruego al señor Juez niegue las pretensiones de la demanda y exonere a mi representada de cualquier clase de responsabilidad.

IV. EXCEPCIONES DE FONDO O MÉRITO FRENTE A LA DEMANDA

4.1. AUSENCIA DE PRUEBA DE OCURRENCIA DEL SINIESTRO

Nuestro ordenamiento jurídico señala que el siniestro es la realización del riesgo asegurado⁸. Así las cosas, la cobertura o riesgo⁹ asegurado, entendido como el peligro que amenaza la vida o patrimonio de las personas y que se pretende afectar en el presente asunto, es la de responsabilidad civil extracontractual, hecho que indefectiblemente entraña la existencia de una actuación realizada por el asegurado con la que se haya ocasionado un perjuicio a personas no ocupantes del vehículo por los que el asegurado sea civilmente responsable y en el que exista un nexo de causalidad que determine que su actuación incidió de manera directa, exclusiva y determinante en el perjuicio ocasionado.

Es claro que en el caso que nos ocupa, la parte demandante deberá probar la existencia de los elementos estructurantes de la responsabilidad civil¹⁰, de los que se pueda inferir una responsabilidad por parte de la aseguradora, así como la de demostrar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida¹¹ de cara al contrato de seguro, requisitos sin los cuales, mi representada no podría realizar erogación alguna.

De acuerdo con lo estipulado en el contrato de seguro y en sus condiciones generales y particulares, no ha ocurrido siniestro alguno dentro de los riesgos asegurados por la póliza expedida por mi representada.

Como se manifestó anteriormente, no se realizó el riesgo asegurado y en este sentido, no puede hablarse de la ocurrencia de siniestro, condición necesaria para hacer surgir la obligación del asegurador en el pago de la indemnización.

⁸ Código de Comercio, art. 1072 - “Se denomina siniestro la realización del riesgo asegurado”.

⁹ J. EFREN OSSA G., “*Tratado elemental de seguros*”, Medellín, Colombia, 1956, pág. 3.

¹⁰ CSJ SC 6 de abril de 2001, rad. 5502.

¹¹ Código de Comercio, art. 1077 - CARGA DE LA PRUEBA. “Corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuere el caso...”

4.2.INEXISTENCIA DE COBERTURA POR NO ESTAR DEMOSTRADA LA RESPONSABILIDAD DE LOS DEMANDADOS

Quien pretenda la declaración judicial de un derecho debe probar los hechos que le sirven de causa, so pena de que sus pretensiones se resuelvan en su contra.

Ese es el sentido del artículo 167 del C.G.P., que contempla la carga de la prueba en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 167. CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.

Pues bien, como se observa con facilidad, la actividad probatoria se erige en una carga procesal, por cuya virtud, quien no prueba o quien omite probar se expone al riesgo de no formar la convicción judicial y, por ende, a una decisión desfavorable. Por ello, la carga de la prueba se entiende como “un imperativo del interés propio”.

Por otra parte, en relación con la responsabilidad en este tipo de eventos, resulta ilustrativo lo señalado por el profesor Álvaro Pérez Vives respecto de la colisión de actividades peligrosas:

“El daño es el resultado de la conjunción de dos culpas presuntas, es decir, que se haya producido en el ejercicio por parte de ambos adversarios de actividades, o provengan de cosas, de las cuales la jurisprudencia desprenda presunciones de culpa o con la intervención de varias personas sujetas a la dependencia de otras. Por ejemplo, dos automóviles en marcha chocan; dos menores se arrojan piedras desde la terraza de la casa de cada uno de ellos, ocasionando daños en sus respectivas residencias y en sus automóviles estacionados cerca de ellas”.

Para encuadrar un caso en la hipótesis de la colisión de conductas peligrosas, se requiere lo siguiente: primero, que las dos partes se encuentren ejerciendo una actividad peligrosa; segundo, que ninguna de las dos partes incurra en una culpa adicional, pues, de lo contrario, esta absorbería la peligrosidad propia de la actividad y, por tanto, se le tendría como causante del daño.

El principal efecto de la colisión de actividades peligrosas es que ya no se aplicaría el régimen de culpa presunta, sino que estaría llamado a aplicar el régimen del 2341, es decir, de culpa probada. Esto debido a que, bajo esta figura, se estarían enfrentado dos presunciones que resultarían anuladas, lo que significa que ambas partes deben entrar a probar la culpabilidad del otro. En este caso, es evidente la colisión de actividades peligrosas, por lo que la parte demandante debe probar la existencia de todos los elementos de la responsabilidad, incluida la culpa exclusiva de quien se demanda, lo que no se evidencia en el presente caso.

En efecto, el agente de tránsito no codificó a ninguno de los vehículos involucrados en el accidente de tránsito. Sí se señaló la hipótesis 157 “por establecer quien cruza semáforo en rojo”. No obstante, por falta de elementos de juicio, no se le atribuyó a ninguno de los involucrados.

11. HIPÓTESIS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO			
DEL CONDUCTOR	457	DEL VEHÍCULO	
		DE LA VÍA	
OTRA	157 por establecer quien cruza semáforo en rojo		
12. TESTIGOS			

Así mismo, el 8 de octubre de 2021, la compañía procedió a objetar la reclamación con base en los siguientes argumentos:

La póliza de seguros automóviles individual livianos No. 022403031, en su capítulo I- Definición de los amparos III. Establece lo siguiente:

"6. Responsabilidad Civil Extracontractual

La Compañía indemnizará los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales, incluyendo el lucro cesante y daño moral, siempre y cuando se encuentren debidamente acreditados, que cause el asegurado o el conductor autorizado con motivo de la Responsabilidad Civil Extracontractual en que incurra de acuerdo con la ley, proveniente de un accidente de tránsito ocasionado por el vehículo descrito en esta póliza."

Con base en lo anterior, el tercero debe acreditar los perjuicios de carácter patrimonial y extramatrimonial que reclama, y, en este mismo sentido, demostrar que los mismos son a consecuencia de un evento en el que nuestro asegurado es responsable, es decir, donde se le pueda atribuir responsabilidad a **LILIANA ROJAS AMOROCHO**.

Con base en lo anterior, debe acreditar los perjuicios de carácter patrimonial y extrapatrimonial que reclama, y en este mismo sentido, demostrar que los mismos son consecuencia de un evento en el que nuestro conductor del vehículo asegurado, la señora **LILIANA ROJAS AMOROCHO**, es responsable.

Una vez recibida la solicitud, la compañía procedió con la revisión de la misma junto con los soportes que se adjuntaron, encontrando que no es posible establecer, de manera clara y exclusiva, la responsabilidad a nuestra conductora asegurada, pues los mismos no configuran prueba que determine la responsabilidad del evento ocurrido en cabeza de **LILIANA ROJAS AMOROCHO**, y en adición el informe policial de accidente de tránsito no establece de manera precisa codificación alguna para nuestra conductora del vehículo asegurado.

Así las cosas, y teniendo en cuenta lo antes expuesto lamentamos informarle que no es viable atender de manera favorable su solicitud.

Por todo anterior, **ALLIANZ SEGUROS S.A.** **objeta** la reclamación presentada frente al siniestro de la referencia negando cualquier solicitud de indemnización pretendida.

De igual manera, el 18 de febrero de 2022 y una vez analizada la solicitud de reconsideración presentada por las demandantes, Allianz Seguros S.A. dio respuesta a la misma conforme a lo siguiente:

Conforme al ejercicio de la acción directa que faculta a los damnificados a reclamar la indemnización correspondiente a un hecho donde se viese involucrado el vehículo de placa **HTW 882** asegurado con esta Compañía, es necesario entrar a estudiar si se cumplen con los presupuestos que exige la ley para hacer efectiva dicha indemnización.

En ese sentido, para que opere el amparo de Responsabilidad Civil Extracontractual contratado en la póliza de seguro de Automóviles Individual Livianos - Particulares No. 022403031/ 0, se requiere que se cumplan los siguientes supuestos que configuran la responsabilidad de una persona:

- El hecho, entendido como el actuar del agente que causa el daño. Para ello se requiere que la conducta de aquel agente sea a título de culpa o dolo, con el fin de que se pueda predicar de parte de él una acción resarcitoria.
- El daño, es decir el menoscabo o perjuicio causado al otro.
- La relación de causalidad o nexo casual, entre el hecho generador y el daño sufrido por la víctima.

Bajo ese entendido, si llegase a faltar alguno de estos elementos, no se configuraría la responsabilidad del supuesto causante del accidente de tránsito. En otras palabras, si no concurre alguno de los elementos mencionados anteriormente, así exista un detrimento patrimonial, no sería posible radicar en cabeza de nuestro asegurado la responsabilidad y la consecuente obligación de indemnizar los perjuicios causados, ya que en todo caso el implicado puede defenderse aduciendo la ausencia de uno, varios o de todos estos tres elementos axiológicos.

En el caso particular, la Compañía Aseguradora debe hacer un examen de todos los elementos previamente citados, pues su obligación indemnizatoria está supeditada a que exista o se compruebe la responsabilidad por parte del asegurado, pues de lo contrario; no surgiría dicha obligación, ya que el riesgo amparado no se habría materializado. Por lo tanto, la Aseguradora debe evaluar todas las pruebas que se tienen, con el fin de establecer la incidencia de los comportamientos desplegados por cada uno de los implicados en los hechos informados, y así poder constatar si existe responsabilidad de nuestro asegurado en los hechos materia de reclamo.

En virtud de todo lo expuesto, la Compañía el pasado 08 de octubre de 2021 objetó la correspondiente reclamación, por cuanto no halló soporte alguno en el que se evidenciara la responsabilidad del accidente de tránsito que hoy nos ocupa en cabeza de nuestro conductor amparado. Ahora bien, revisando nuevamente los documentos trasladados a la Aseguradora con ocasión a la solicitud de reconsideración que nos ocupa y los que obran en nuestro sistema, reiteramos que del análisis de los mismos se encontró que no obran elementos que indiquen y/o demuestren la culpabilidad por parte de la amparada **LILIANA MARÍA ROJAS AMOROCHO** en el evento reclamado.

Es decir, de los soportes allegados con la reclamación y la presente solicitud de reconsideración no se halló que nuestra conductora asegurada hubiese actuado de manera imprudente, negligente o infringiendo las normas de tránsito. Por lo tanto, la Compañía ha decidido que hasta el momento en que no se establezca lo contrario, no es viable realizar ofrecimiento alguno por los perjuicios pretendidos.

Entonces, resulta claro que, con la evidencia disponible, no es posible asignar válidamente ningún grado de responsabilidad a ninguno de los vehículos intervinientes en el accidente de tránsito. Esto, visto a la luz del régimen de culpa probada producto de la colisión de actividades peligrosas, hace que no sea posible atribuir responsabilidad alguna a ninguno de los demandados.

4.3. INEXISTENCIA DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURANTES DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL

El apoderado de la parte demandante sustenta sus pretensiones en que el perjuicio sufrido por la parte actora fue como consecuencia de una acción u omisión de los demandados, que generó el accidente en el cual resultó lesionada la señora Angie Natalia Gamba Rincón.

Para que técnicamente pueda determinarse la existencia de la responsabilidad civil, debe acreditarse la existencia de los siguientes tres elementos estructurantes:

1. El daño (sufrido por el reclamante)
2. La culpa, y
3. La Relación de Causalidad o Nexo Causal entre estos dos elementos, es decir, la comprobación de que el daño se produjo como consecuencia del hecho culposos.

Es de resaltar que, la parte demandante atribuye una supuesta responsabilidad a los demandados, apoyándose en una hipótesis contenida en el Informe Policial de Accidentes de Tránsito; sin embargo, se resalta que, no existen pruebas conducentes, pertinentes y útiles que lleven a tal convencimiento.

Pues bien, como se observa con facilidad, la actividad probatoria se erige en una carga procesal, por cuya virtud, quien no prueba o quien omite probar se expone al riesgo de no formar la convicción judicial y, por ende, a una decisión desfavorable. Por ello, la carga de la prueba se entiende como “*un imperativo del interés propio*”.

Frente al daño, se encuentra que la parte demandante demostró haberlos sufrido en cuanto se prueba que como consecuencia del accidente ocurrido el 11 de febrero de 2021, la señora Angie Natalia Gamba Rincón sufrió lesiones en su humanidad.

En lo que tiene que ver con la responsabilidad del conductor, propietario, empresa afiliadora y aseguradora de vehículo con placas HTW-882, ante el ejercicio de una actividad peligrosa como lo es la conducción de vehículos y al haber colisionado con la motocicleta, su responsabilidad debe ser estudiada desde el régimen de las actividades peligrosas establecido en el artículo 2356 del Código Civil, que de acuerdo con la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia se habla de una presunción de responsabilidad en

la que solo puede exonerarse si demuestra una causa extraña, sin que le basta con probar una diligencia debida.

Así mismo, en relación con la responsabilidad en este tipo de eventos, resulta ilustrativo lo señalado por el profesor Álvaro Pérez Vives respecto de la colisión de actividades peligrosas:

“El daño es el resultado de la conjunción de dos culpas presuntas, es decir, que se haya producido en el ejercicio por parte de ambos adversarios de actividades, o provengan de cosas, de las cuales la jurisprudencia desprenda presunciones de culpa o con la intervención de varias personas sujetas a la dependencia de otras. Por ejemplo, dos automóviles en marcha chocan; dos menores se arrojan piedras desde la terraza de la casa de cada uno de ellos, ocasionando daños en sus respectivas residencias y en sus automóviles estacionados cerca de ellas”.

Finalmente, nos encontramos frente a una colisión de actividades peligrosas, es decir que, ya no se aplicaría el régimen de culpa presunta, sino que estaría llamado a aplicar el régimen del 2341, es decir, de culpa probada. Esto debido a que, bajo esta figura, se estarían enfrentado dos presunciones que resultarían anuladas, lo que significa que ambas partes deben entrar a probar la culpabilidad del otro. En este caso, es evidente la colisión de actividades peligrosas, por lo que la parte demandante debe probar la existencia de todos los elementos de la responsabilidad, incluida la culpa exclusiva de quien se demanda, lo que no se evidencia en el presente caso.

En el caso en particular, no se observa la existencia de los elementos estructurantes de la responsabilidad civil, **en especial, no se cuenta con pruebas sobre la relación de causalidad entre el accidente ocurrido y las lesiones padecidas por la señora Angie Natalia Gamba Rincón**, y, por consiguiente, el nacimiento de la obligación indemnizatoria.

Por las razones expuestas, solicitamos respetuosamente al Despacho declarar probada la presente excepción y exonerar de cualquier clase de responsabilidad a mi representada.

4.4. INEXISTENCIA DE PRUEBA DE LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA O PERJUICIOS SUFRIDOS POR LA PARTE DEMANDANTE

Se resalta que la parte demandante relata el evento que da lugar a la reclamación, pero no acredita en debida forma el vínculo civil de responsabilidad entre la conducta desplegada por los demandados con el perjuicio sufrido por la parte demandante.

Al presunto beneficiario no le basta con alegar el acaecimiento de un hecho, sino que además es necesario que se acredite la responsabilidad del asegurado (existencia del siniestro) y la cuantía del perjuicio sufrido.

De conformidad con lo establecido en el artículo 167 del Código General del Proceso, *“incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen (...)”*.

En el caso particular, la parte demandante pretende el pago de diecisiete millones cuatrocientos ochenta y dos mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos (\$17.482.469) a título de **Lucro Cesante Consolidado** y, la suma de ciento veintiséis millones doscientos dieciséis mil seiscientos cuarenta y dos pesos (\$126.216.642) por concepto de **Lucro Cesante Futuro**; sin embargo, la certificación emitida por la señora Yuliet Natalia González, directora de talento humano de Seguros Premium LTDA deberá ser objeto de ratificación, con exhibición de los soportes que llevaron a su emisión.

Ahora, el apoderado de la parte demandante realizó la liquidación con base en el salario básico más comisiones; sin embargo, para que las comisiones constituyan salario, estas deberán ser probadas, en el sentido de que se concedían de manera habitual, aunado a que, la liquidación se realizó sobre una pérdida de capacidad laboral del 35% la cual no se encuentra probada; por el contrario, reposa dentro del expediente dictamen de pérdida de la capacidad laboral emitido por Seguros Alfa S.A., en el cual se le otorgó a la demandante una PCL del 13,50%, lo cual dista de lo manifestado por el apoderado de la parte actora.

Adicionalmente, es de resaltar que este tipo de perjuicios solo se deben indemnizar en la medida en que se compruebe su certeza y que efectivamente se hayan ocasionado, cuestión que incumbe a quien los reclama.

Así mismo, no se encuentra demostrado que la señora Angie Natalia Gamba Rincón, se hubiera visto forzado a abandonar sus actividades cotidianas y, producto de ello, hubiera dejado de obtener sus respectivas erogaciones o ganancias, motivo por el cual queda desvirtuada la existencia del derecho.

Frente al daño extrapatrimonial, en la modalidad de **daño moral y daño a la vida de relación**, vale la pena resaltar que, el reconocimiento de este tipo de daño se encuentra supeditado, en todo caso, a la prueba real y efectiva de la intensidad de los sufrimientos en la esfera interna y externa de las demandantes sin que sea procedente la construcción de presunción alguna en este sentido.

Teniendo en cuenta que no se ha acreditado la responsabilidad ni la cuantía de los perjuicios que aduce haber sufrido la parte demandante, mi asegurada no tiene ninguna obligación indemnizatoria.

4.5. EXCESIVA TASACIÓN DE PERJUICIOS

En el caso particular, la parte demandante pretende el pago de diecisiete millones cuatrocientos ochenta y dos mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos (\$17.482.469) a título de **Lucro Cesante Consolidado** y, la suma de ciento veintiséis millones doscientos dieciséis mil seiscientos cuarenta y dos pesos (\$126.216.642) por concepto de **Lucro Cesante Futuro**; sin embargo, la certificación emitida por la señora Yuliet Natalia González, directora de talento humano de Seguros Premium LTDA deberá ser objeto de ratificación, con exhibición de los soportes que llevaron a su emisión.

Ahora, el apoderado de la parte demandante realizó la liquidación con base en el salario básico más comisiones; sin embargo, para que las comisiones constituyan salario, estas deberán ser probadas, en el sentido de que se concedían de manera habitual, aunado a que, la liquidación se realizó sobre una pérdida de capacidad laboral del 35% la cual no se encuentra probada; por el contrario, reposa dentro del expediente dictamen de pérdida de la capacidad laboral emitido por Seguros Alfa S.A., en el cual se le otorgó a la demandante una PCL del 13,50%, lo cual dista de lo manifestado por el apoderado de la parte actora y por ende resulta excesiva.

Tenemos que, para liquidar el lucro cesante consolidado se debe tener en cuenta el número de meses transcurridos desde el momento del accidente de tránsito hasta la fecha de la liquidación y, para liquidar el lucro cesante futuro, el número de meses transcurridos desde la fecha de la liquidación hasta la edad probable de acuerdo con la esperanza de vida emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia; sin embargo, este análisis no fue realizado por la parte demandante y su pretensión carece de fundamento.

Respecto del **Daño Moral**, se pretende el pago de sesenta millones de pesos (\$60.000.000) a favor de la señora Angie Natalia Gamba Rincón y, treinta millones de pesos (\$30.000.000) a favor de la señora Rosa María Rincón Millán; sin embargo, las cifras solicitadas en esta pretensión son excesivas, teniendo en cuenta que la Corte Suprema de Justicia¹² ha determinado un precedente de setenta y dos millones de pesos (\$72.000.000) para los casos dramáticos.

En lo correspondiente al **Daño a la Vida de Relación**, se pretende el pago de ciento cuarenta millones de pesos (\$140.000.000) a favor de la señora Angie Natalia Gamba Rincón y setenta millones de pesos (\$70.000.000) a favor de la señora Rosa María Rincón Millán; sin embargo, se resalta que la cifra solicitada resulta ser excesiva en consideración a lo ya decantado jurisprudencialmente.

Teniendo en cuenta que no se ha acreditado la responsabilidad y la cuantía de los perjuicios que aduce haber sufrido la parte demandante, ruego al Despacho declarar fundada esta excepción.

4.6. DELIMITACIÓN DE LOS RIESGOS AMPARADOS POR LA PÓLIZA DE AUTOMÓVILES, EXTENSIÓN DE LA COBERTURA Y EXCLUSIONES ESPECÍFICAS DE COBERTURA

En el caso en particular y, de acuerdo con los hechos presentados en la demanda, el amparo que se pretende afectar es el de Responsabilidad Civil Extracontractual, esto quiere decir que la cobertura se circunscribe únicamente al riesgo relacionado en el caso en que se logre probar la existencia de los elementos estructurantes de esta clase de responsabilidad civil y su cuantía, cosa que no ocurrió en este caso.

¹² Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Radicación No 05001-31-03-003-2005-00174-01, SC13925-2016 del 24 de agosto de 2016, M.P. Ariel Salazar Ramírez.

Ahora bien, frente al amparo que eventualmente se podría afectar, se resalta que la carátula de la póliza y el condicionado que rige el contrato de seguro establecen sus límites, condiciones, exclusiones y, en general, los términos en los cuales fueron otorgados.

Por las razones expuestas, de manera respetuosa reitero que, en el hipotético e improbable caso de una condena, debe tenerse en cuenta cuáles son los amparos, las extensiones y las exclusiones a la cobertura establecidos en el contrato de seguro expedido por ALLIANZ SEGUROS S.A.

4.7. LÍMITE DE LA RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADOR

Para que nazca para el Asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios que se derivan del incumplimiento total o parcial de un contrato de seguro debe existir un siniestro o realización del riesgo asegurado¹³.

Una vez sea verificada la existencia del siniestro, y para efectos de determinar la responsabilidad del asegurador, éste no estará obligado a responder sino hasta concurrencia de la suma asegurada¹⁴.

Respecto al monto de la indemnización en el seguro de daños, la jurisprudencia ha señalado que, en caso de presentarse un riesgo, no se puede reclamar del asegurador una suma mayor a la asegurada, así el daño haya sido superior, ni cifra que exceda del monto del daño, aunque el valor asegurado fuera mayor¹⁵.

Dentro de la carátula de la póliza de automóviles número 022403031, se establece el límite del valor asegurado relacionado con el amparo que se pretende afectar, de manera que ese límite determina el valor máximo al que puede resultar condenada la aseguradora en caso de que se pruebe la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida.

Teniendo en cuenta lo anterior, resalto de manera respetuosa que en el hipotético e improbable caso de una condena debe tenerse en cuenta la naturaleza jurídica del Contrato de Seguro mencionado y que el mismo está concebido legalmente para asegurar el pago de la suma correspondiente al valor probado, y hasta el límite del valor asegurado.

4.8. DISPONIBILIDAD EN COBERTURA DEL VALOR ASEGURADO

En el hipotético caso de una condena, deberá tenerse en cuenta el límite asegurado, de tal manera que será objeto de prueba acreditar cuáles valores ha desembolsado ALLIANZ SEGUROS S.A. durante la vigencia en que ocurrió el siniestro, para proceder a descontar dichos valores. En consecuencia y en el caso de que ya se hubieren atendido otros siniestros durante la misma vigencia hasta la suma asegurada, no habrá cobertura para el asunto que nos ocupa.

4.9. CONCURRENCIA DE CULPAS

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha señalado que cuando el coautor del daño comete una culpa evidente que concurre con la conducta igualmente culpable de la víctima, el juez debe graduar cuantitativamente la relación de causalidad entre las culpas cometidas de manera concurrente, y la cuantía del daño, a fin de reducir la indemnización mediante el juego de una proporción que al fin y al cabo se expresa de manera matemática y cuantitativa¹⁶.

En el mismo sentido ha indicado que la concurrencia de causas viene impuesta por dos principios elementales de lógica jurídica que dominan esta materia, a saber, que cada quien debe soportar el daño en la medida en que ha contribuido a provocarlo, y que nadie debe cargar con la responsabilidad y el perjuicio ocasionado por otro¹⁷.

¹³ Código de Comercio, art. 1072 - “Se denomina siniestro la realización del riesgo asegurado”.

¹⁴ Código de Comercio, art. 1079 - “El asegurador no estará obligado a responder sino hasta concurrencia de la suma asegurada (...)”

¹⁵ CSJ, Sentencia 5065 de julio 22 de 1999, M.P. Nicolás Bechara Simancas.

¹⁶ CSJ, Sentencia del 25 de noviembre de 1999, Expediente 5173, M.P. Silvio Fernando Trejos.

¹⁷ G. J. Tomos LXI, pág. 60, LXXVII, pág. 699, y CLXXXVIII, pág. 186, Primer Semestre, entre otras.

De manera que, el Juez debe examinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se produce el daño, y, así, establecer el grado de responsabilidad que corresponda a cada uno de los actores, de conformidad con lo establecido en el artículo 2357 del Código Civil.

Por las razones expuestas, solicitamos respetuosamente al Despacho, en el hipotético caso de una condena a mi representada, declarar probada la presente excepción y se tenga en cuenta la graduación entre las culpas cometidas de manera concurrente y la cuantía del daño, con el fin de reducir el valor de indemnización que se ordene pagar.

4.10. LAS QUE RESULTEN PROBADAS EN EL PROCESO (GENÉRICA, ECUMÉNICA O INNOMINADA)

De conformidad con lo establecido en el artículo 282 del Código General del Proceso¹⁸, comedidamente se solicita que en caso de que el Despacho halle probados hechos que constituyan alguna excepción, la reconozca oficiosamente.

V. FUNDAMENTOS DE DERECHO Y RAZONES DE LA DEFENSA

LA RESPONSABILIDAD

Desde el punto de vista conceptual, se ha entendido por responsabilidad la situación por medio de la cual una persona se encuentra en la necesidad y en la obligación de asumir jurídicamente los efectos que ha producido un acto o un hecho, efectuado directamente por su comportamiento, o por la actividad de terceras personas que están bajo su cuidado o dependencia, o por la ocurrencia de alteraciones físicas ocasionadas por cosas, animadas o inanimadas o con ocasión de actividades que pueden catalogarse como de lógico riesgo.

De acuerdo con lo que el agente causante del daño tenga que asumir y de la causa que haya dado origen a la situación, se ha clasificado este fenómeno desde el punto de vista amplio y genérico en dos modalidades: responsabilidad civil contractual y extracontractual, según que ese deber de arrogarse unas consecuencias provenga de un contrato, convención o emane de la mera ocurrencia de un hecho sin la intervención de una voluntad dirigida a la producción de esa circunstancia, respectivamente.

Frente a la responsabilidad contractual, ésta encuentra su fundamento en el «título 12 del libro cuarto» del Código Civil, que regula lo atinente al «efecto de las obligaciones», se define aquella, en sentido amplio, como la obligación de resarcir el daño sufrido por el «acreedor» debido al incumplimiento del «deudor» de obligaciones con origen en el «contrato».

Por el contrario, la figura de responsabilidad civil extracontractual está encaminada a resarcir los daños ocasionados por un hecho donde no media previamente contrato alguno, es así como en el artículo 2341 del Código Civil se define que “*El que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido*”.

ELEMENTOS ESTRUCTURANTES DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL

Ahora, para que técnicamente pueda determinarse la existencia de la responsabilidad civil, debe acreditarse la existencia de los siguientes tres elementos estructurantes:

1. El daño (sufrido por el reclamante)
2. La culpa, y
3. La Relación de Causalidad o Nexo Causal entre estos dos elementos, es decir, la comprobación de que el daño se produjo como consecuencia del hecho culposo.

En el caso en particular, no se observa la existencia de los elementos estructurantes de la responsabilidad civil, **en especial, no se cuenta con pruebas sobre la ocurrencia del hecho**, por consiguiente, el nacimiento de la obligación indemnizatoria.

¹⁸ **ARTÍCULO 282. RESOLUCIÓN SOBRE EXCEPCIONES.** *En cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda. (...)*”

De acuerdo con la normatividad que rige el contrato de seguro de responsabilidad civil en Colombia, las compañías aseguradoras solamente están obligadas a indemnizar los perjuicios que se causen a terceras personas cuando existan pruebas que aseguren la certeza sobre la realización del riesgo asegurado – siniestro, y que permitan la acreditación de la calidad de beneficiario, el monto del perjuicio sufrido y la cuantía de estos.

El artículo 1077 del Código de Comercio señala:

“Corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuere el caso.”

A su vez el artículo 167 de Código General del Proceso establece:

“Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.

Para que nazca para el Asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios que se derivan del incumplimiento total o parcial de un contrato de seguro debe existir un siniestro o realización del riesgo asegurado.

Una vez sea verificada la existencia del siniestro, y para efectos de determinar la responsabilidad del asegurador, el artículo 1079 del Código de Comercio establece:

“El asegurador no estará obligado a responder sino hasta concurrencia de la suma asegurada (...)”

Respecto al monto de la indemnización en el seguro de daños, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha dicho:

*“El contrato de seguro de daños, según desde el ángulo que se le mire, es meramente indemnizatorio de todo o parte del perjuicio sufrido por el asegurado, o puede entrañar ganancia, pero solo para el asegurador. Tal la razón para que el tomador, **en caso de presentarse el riesgo, no pueda reclamar del asegurador suma mayor que la asegurada, así el daño haya sido superior, ni cifra que exceda del monto del daño, aunque el valor asegurado fuera mayor.** El asegurado logra así, a través del contrato de seguro, la posibilidad de obtener la reparación del detrimento que sufra en su patrimonio a causa del acaecimiento del siniestro; su aspiración no puede ir más allá del alcanzar una compensación del empobrecimiento que le cause la ocurrencia del insuceso asegurado; el contrato le sirve para obtener una reparación, más no para conseguir un lucro.”* (Negrillas fuera de texto).

Luego de realizar un estudio juicioso de los documentos aportados con la demanda, se concluye que la parte demandante no logró acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 1077 del Código de Comercio.

LOS PERJUICIOS MATERIALES E INMATERIALES

Respecto de los perjuicios materiales, se resalta que éstos tienen relación directa con el menoscabo económico padecido en virtud del hecho descrito como lesivo, y se clasifican, de conformidad con el artículo 1614 del Código Civil, en daño emergente y lucro cesante, de suerte que, para su demostración y tasación, se puede hacer uso de los diferentes elementos de convicción contemplados por el legislador.

Este tipo de perjuicios solo se deben indemnizar en la medida en que se compruebe su certeza y que efectivamente se hayan ocasionado, cuestión que incumbe a quien los reclama, pues aunque incluso en los eventos en que se deja establecida la responsabilidad por un hecho injusto, *“...esta no conduce en todos los casos, ni de manera indefectible, a la condena de perjuicios...”*¹⁹, toda vez que *“...para que haya lugar a indemnización se requiere que haya perjuicios, los que deben demostrarse porque la culpa por censurable que sea no los produce de suyo. Vale esto como decir que quien demanda que se le indemnice debe probar que los ha sufrido. Más todavía: bien puede haber culpa y haberse demostrado perjuicios y, sin embargo, no prosperar la acción indemnizatoria porque no se haya acreditado que esos*

¹⁹ Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sala Civil. Providencia del 4 de mayo de 2011. Exp. 2007-334-01. 30 C.S.J. Sentencia calendarada el 24 de julio de 1985. G.J. CLXXX. Pág. 182.

sean efecto de aquella; en otros términos, es preciso establecer el vínculo de causalidad entre una y otros”.

Respecto al lucro cesante, de conformidad con el artículo 1614 del Código Civil, se entiende por aquella *“...ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumpliéndola imperfectamente, o retardando su cumplimiento...”*.

En tal sentido, es bien sabido que este perjuicio material se refiere al provecho que, de no producirse el daño, debió entrar al patrimonio de la víctima, pero el quebranto de ese interés que se deja de percibir obedece a una situación real, susceptible de constatación física, material u objetiva, y excluye la eventualidad de hipotéticas ganancias, cuya probabilidad es simplemente remota.

En ese orden de ideas, cierto e indiscutible es que quien reclama la indemnización de perjuicios, debe acreditar plenamente su cuantía y en qué consistieron los mismos, por cuanto siempre ha de exigirse certeza del detrimento y no partir de meras hipótesis o eventualidades, pensamiento sobre el que la jurisprudencia ha sostenido que:

“...En tratándose del daño, y en singular, del lucro cesante, la indemnización exige la certeza del detrimento, o sea, su verdad, existencia u ocurrencia tangible, incontestable o verosímil, ya actual, ora ulterior, acreditada por el demandante como presupuesto ineluctable de la condena con pruebas idóneas en su entidad y extensión...”.

*“...La certidumbre del daño, por consiguiente, es requisito constante ineludible de toda reparación y a tañe a la real, verídica, efectiva o creíble conculcación del derecho, interés o valor jurídicamente protegido, ya actual, bien potencial o inminente, más no eventual, contingente o hipotética...”*²⁰.

Sobre el particular, en materia probatoria, le corresponde a las partes demostrar todos aquellos hechos que sirvan de presupuesto a la norma que consagra el derecho que persiguen, de tal suerte que quien invoca un hecho para lograr la aplicación de determinada preceptiva legal, corre con la carga de su demostración fehaciente, pues de lo contrario la decisión será adversa a tal pedimento, lo que se complementa con el artículo 1757 del Código Civil, conforme al cual incumbe probar las obligaciones o su extinción a quien alega aquellas o esta, pues *“...Los derechos sub-lite dependen de la acción u omisión del interesado. Las cargas procesales imponen a la parte asumir ciertas conductas o abstenciones cuyo incumplimiento puede generar riesgos de una decisión desfavorable y, por ende, el no reconocimiento de sus derechos subjetivos (...) los efectos de su incumplimiento acarrearán riesgos que pueden concretarse en una decisión adversa...”*²¹.

De conformidad con lo establecido en el artículo 167 del Código General del Proceso, *“incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen (...)”*.

A diferencia del perjuicio patrimonial, el extrapatrimonial hace referencia a todas aquellas repercusiones dañosas que no son estimables pecuniariamente mediante un método preciso de cuantificación.²²

En este caso se analiza entonces la repercusión no económica que ha tenido el hecho dañoso, la cual, en general, supone una detracción en la esfera interna del individuo (como la tristeza, la aflicción y la congoja) o en su proyección externa (como sucede con su capacidad de relación en comunidad).²³

Significa lo anterior que solo quien padece ese dolor subjetivo, conoce la intensidad con que se produjo, tal sufrimiento no puede ser comunicado en su verdadera dimensión a nadie más, no obstante, como tal perjuicio no puede quedar sin resarcimiento, es el propio juez quien debe regularlos. En este punto es necesario distinguir entre la prueba del perjuicio moral y la cuantificación del resarcimiento. Así, la existencia del perjuicio puede probarse por cualquier medio idóneo, pero la determinación de su tasación es tarea exclusiva que depende del buen criterio del sentenciador³¹, quien en ejercicio del *arbitrium judicis* orientado a fijar el *quantum* en dinero del resarcimiento del daño moral, tendrá en cuenta, las circunstancias personales de la persona accidentada; su grado de parentesco con los demandantes; la cercanía que había entre ellos, así como la forma en que tuvo lugar el incidente.

²⁰ C.S.J. Sentencias de 11 de mayo de 1976, 10 de agosto de 1976, G.J. No. 2393, p.143 y 320.

²¹ Corte Suprema de Justicia, sentencia C-070 de 1993, citada en sentencia del 30 de septiembre de 2004, exp. 7142.

²² TAMAYO JARAMILLO, Javier, *Los perjuicios extrapatrimoniales*, Revista Latinoamericana de Responsabilidad Civil, No. 2, 2014, Att. 154 y 155.

²³ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 18 de septiembre de 2009. M.P. William Namén Vargas.

El daño moral, al proyectarse sobre la esfera externa del individuo, es decir, su vida en comunidad y los placeres que la misma genera, el daño a la vida de relación admite una labor probatoria más concreta y menos intangible, lo cual puede probarse por diferentes medios y, por el hecho de referirse a un aspecto objetivo, no cae en el grado de indeterminación en el que sí cae el daño moral.

De ahí que deberá probarse de qué manera el sujeto se ha visto privado de los placeres y de la alegría de vivir, partiendo de un estándar de comparación respecto de su vida anterior al hecho dañoso, la que tendría si dicho hecho no hubiera sucedido y la vida ordinaria para el contexto al cual pertenece.

Cuando la prueba logra evidenciar que la vida de la persona de que se trate, en lo que tiene que ver con su proyección extrapatrimonial exterior, está en una situación menos favorable que aquella en la que se encontraría si el acontecimiento dañoso no hubiera tenido lugar, se encuentra entonces acreditado el daño a la vida de relación, el cual, se itera nos es objeto, *prima facie*, de presunción.²⁴

CARGA DE LA PRUEBA

El artículo 167 de Código General del Proceso establece:

“Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.

Para que nazca para el Asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios que se derivan del incumplimiento total o parcial de un contrato de seguro debe existir un siniestro o realización del riesgo asegurado.

Una vez sea verificada la existencia del siniestro, y para efectos de determinar la responsabilidad del asegurador, el artículo 1079 del Código de Comercio establece:

“El asegurador no estará obligado a responder sino hasta concurrencia de la suma asegurada (...)”

Respecto al monto de la indemnización en el seguro, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha dicho:

*“El contrato de seguro de daños, según desde el ángulo que se le mire, es meramente indemnizatorio de todo o parte del perjuicio sufrido por el asegurado, o puede entrañar ganancia, pero solo para el asegurador. Tal la razón para que el tomador, **en caso de presentarse el riesgo, no pueda reclamar del asegurador suma mayor que la asegurada, así el daño haya sido superior, ni cifra que exceda del monto del daño, aunque el valor asegurado fuera mayor.** El asegurado logra así, a través del contrato de seguro, la posibilidad de obtener la reparación del detrimento que sufra en su patrimonio a causa del acaecimiento del siniestro; su aspiración no puede ir más allá del alcanzar una compensación del empobrecimiento que le cause la ocurrencia del insuceso asegurado; el contrato le sirve para obtener una reparación, más no para conseguir un lucro.”* (Negrillas fuera de texto).

VI. OBJECCIÓN A LAS PRUEBAS APORTADAS Y SOLICITADAS POR LA PARTE DEMANDANTE

De manera respetuosa objeto y me pronuncio sobre las pruebas aportadas y solicitadas por la parte demandante.

6.1. A LAS APORTADAS

6.1.1. A LAS FOTOGRAFIAS

De manera respetuosa me permito objetar la prueba denominada *“1.11 Imágenes fotográficas donde se observan algunas lesiones y tratamientos practicados a ANGIE NATALIA GAMBA RINCON.”*, toda vez que, con las mismas, no se puede determinar el tipo de secuelas que tuvo la señora Angie Natalia Gamba

²⁴ Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Sala Civil. Sentencia del 30 de agosto de 2011. Exp. 2009-0391-00. 36 ROJAS QUIÑONES, Sergio, El daño a la persona y su reparación, Grupo Editorial Ibáñez, 2015. Pág. 135 y ss.

Rincón con ocasión al accidente de tránsito, ni el tratamiento recibido, ni que ellas fueran derivadas o con ocasión al accidente ocurrido el 11 de febrero de 2021.

Por lo anterior, solicito no tener estas fotografías como pruebas documentales.

6.2. A LAS SOLICITADAS

6.2.1. A LAS TESTIMONIALES

De manera respetuosa solicito al despacho no decretar la prueba relacionada con los testimonios de los señores Diana Rocío Sánchez Rincón, Willimam Esteban Muñoz Rodríguez, Ana Flor Barreto Alba y Mojazmid Camargo Pérez, considerando que, la solicitud no cumple con los requisitos formales establecidos en el artículo 212²⁵ del Código General del Proceso, toda vez que el apoderado de la parte demandante no indicó los hechos sobre los cuáles concretamente los testigos rendirán su declaración, es decir, no se manifestó específicamente qué o cuales hechos serán probados a través de este medio de prueba.

VII. PRUEBAS

7.1. DOCUMENTALES

- Poder Especial para representar a la Compañía ALLIANZ SEGUROS S.A.
- Certificado de existencia y representación legal de esta Compañía, expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia.
- Póliza de Automóviles No. 022403031.
- Condicionado general aplicable a la Póliza de Automóviles No. 022403031.
- Objeción del 8 de octubre de 2021.
- Ratificación objeción 18 de febrero de 2022.

7.2. INTERROGATORIO DE PARTE

Respetuosamente solicito al Despacho se llame a las señoras Angie Natalia Gamba Rincón y Rosa María Rincón Millán, demandantes dentro del proceso de referencia, para que absuelvan interrogatorio de parte que verbalmente o por escrito les formularé en relación con los hechos planteados en la contestación de la demanda y las excepciones propuestas en la misma.

7.3. TESTIMONIO CON RATIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

Solicito respetuosamente al Despacho, se sirva citar a:

- A la señora Yuliet Natalia González directora de talento humano de Seguros Premium LTDA o quien haga sus veces, para que ratifique la información contenida en el certificado laboral expedido el 29 de marzo de 2021, el cual fue aportado con la demanda.

Teniendo en cuenta que en la certificación aportada no reposan los datos de notificación o contacto de la testigo, se solicita al Despacho que sea notificada por medio de la parte actora.

- A la señora Gladys Margarita Malagón con el fin de ratificar la declaración emitida el 26 de junio de 2023. La señora Malagón podrá ser citada en la dirección electrónica elamavel@gmail.com, dirección carrera 77 B Bis N° 76 - 60, barrio la Granja de Bogotá D.C., teléfono 310 3289681, los cuales fueron aportados con el documento anexo a la demanda o por intermedio de la parte demandante.
- Al señor Jaime Franco Cifuentes, con el fin de ratificar la entrevista rendida el 29 de junio de 2022, ante servidor de policía judicial. El señor Franco puede ser citado en la Calle 31 A No. 24 – 54 sur de la ciudad de Bogotá o al correo electrónico jfranco0823@hotmail.com.

²⁵ **Petición de la prueba y limitación de testimonios**

Cuando se pidan testimonios deberá expresarse el nombre, domicilio, residencia o lugar donde pueden ser citados los testigos, y enunciarse concretamente los hechos objeto de la prueba.

El juez podrá limitar la recepción de los testimonios cuando considere suficientemente esclarecidos los hechos materia de esa prueba, mediante auto que no admite recurso. (Negrilla fuera de texto)

7.4. TESTIMONIO

Solicito al despacho participación en los testimonios que se decreten, con el fin de formular preguntas, así como de contrainterrogar.

VIII. NOTIFICACIONES

Las demandantes reciben notificaciones en la Carrera 77 B Bis N° 78 – 48 de la ciudad de Bogotá y a los correos electrónicos angiegamba2015@gmail.com y rosarinconmillan@gmail.com, los cuales fueron señalados en el escrito de la demanda.

El apoderado de la parte actora recibe notificaciones en la Avenida Calle 26 N° 69 – 76 torre 3 oficina 1501 de Bogotá, teléfono: 312 3758338, correo electrónico: fernandolchavezg.abog@gmail.com y directorjuridico@at-abogadosespecializados.com, los cuales fueron señalados en el escrito de la demanda.

Los demandados Liliana María Rojas Amorocho y José Pablo Mejía Plata pueden ser notificados en la dirección Calle 119 N° 72 B – 92 torre 2 apartamento 802 de la ciudad de Bogotá y, a los correos electrónicos limarojas@yahoo.com y jopamejia@gmail.com. Teléfono: 320 8580019, los cuales fueron señalados en el escrito de la demanda.

Con fundamento en el artículo 96 del Código General del Proceso, procederé a indicar bajo la gravedad de juramento el lugar donde la Compañía demandada, y su apoderado, recibirán notificaciones.

- ALLIANZ SEGUROS S.A. recibe notificaciones en la Calle 116 Número 7-15, oficina 1401 Edificio Cusezar de la ciudad de Bogotá D.C. correo electrónico: notificaciones.co@zurich.com
- El suscrito, en mi condición de apoderado de la compañía de seguros mencionada, recibo notificaciones en la Calle 127 Bis número 88 - 10 Interior 1, Oficina 501, Bogotá D.C., Celular: 317 432 0175 - Correo Electrónico: hernandezchavarroasociados@gmail.com

Del señor Juez, respetuosamente,



JAIME ENRIQUE HERNÁNDEZ PÉREZ

C.C. 79.938.138 de Bogotá

T.P. 180.264 del Consejo Superior de la Judicatura